



Asamblea General Consejo Económico y Social

Distr. general
13 de mayo de 2019
Español
Original: inglés

Asamblea General
Septuagésimo cuarto período de sesiones
Tema 62 de la lista preliminar*
**Soberanía permanente del pueblo palestino en el
Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén
Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio
ocupado sobre sus recursos naturales**

Consejo Económico y Social
Período de sesiones sustantivo de 2019
Tema 16 del programa
**Consecuencias económicas y sociales de la
ocupación israelí para las condiciones de
vida del pueblo palestino en el Territorio
Palestino Ocupado, incluida Jerusalén
Oriental, y de la población árabe en el
Golán sirio ocupado**

Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado

Nota del Secretario General

Resumen

En su resolución [2018/20](#), titulada “Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado”, el Consejo Económico y Social solicitó al Secretario General que presentara a la Asamblea General en su septuagésimo tercer período de sesiones, por conducto del Consejo, un informe sobre la aplicación de esa resolución. La Asamblea, en su resolución [73/255](#), titulada “Soberanía permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales”, también solicitó al Secretario General que le presentara un informe en su septuagésimo cuarto período de sesiones. El presente informe, que fue preparado por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), se presenta en cumplimiento de estas resoluciones del Consejo y de la Asamblea.

El informe abarca la persistencia de prácticas y políticas israelíes, en particular las que podrían constituir una violación del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y que afectan a las condiciones sociales y económicas de las personas que viven bajo su ocupación militar.

* [A/74/50](#).



La CESPAO desea expresar su agradecimiento por las contribuciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Secretaría, el Fondo Monetario Internacional, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa Mundial de Alimentos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y la Organización Mundial de la Salud.

I. Introducción

1. En su resolución [2018/20](#), el Consejo Económico y Social expresó preocupación por las consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado. En su resolución [73/255](#), la Asamblea General exigió a Israel, la Potencia ocupante, que dejara de explotar, dañar, destruir, agotar y poner en peligro los recursos naturales del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y del Golán sirio ocupado. En la presente nota se proporciona información sobre los acontecimientos pertinentes en relación con lo anterior.

II. Territorio Palestino Ocupado

Prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado

Legislación de Israel que afecta al Territorio Palestino Ocupado

2. En los últimos dos años, los miembros del Knéset, principal órgano legislativo de Israel, han propuesto varias iniciativas legislativas destinadas a promover la legalización retroactiva de los asentamientos. A ello se sumó la expansión de los asentamientos ilegales israelíes (véase [A/73/410](#), párr. 58)¹, tras decenios de prácticas sobre el terreno que afianzaron la ocupación y el control israelí de tierras en el Territorio Palestino Ocupado, en particular en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén oriental².

3. La Ley de Reglamentación, aprobada en febrero de 2017, sigue sin aplicarse a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre su legalidad (véase *ibid.*, párr. 12). De aplicarse, permitiría continuar utilizando tierras privadas palestinas en la Ribera Occidental para entre 2.000 y 4.000 unidades de vivienda, según algunas estimaciones (véanse [A/73/87-E/2018/69](#), párr. 35, y [A/72/90-E/2017/71](#), párr. 23).

4. Una enmienda a la Ley Básica: Jerusalén, Capital de Israel, aprobada en enero de 2018, dispone que se necesita una mayoría especial de 80 votos en el Knéset para aprobar concesiones territoriales en Jerusalén a “una entidad extranjera”, al tiempo que reduce el umbral necesario para cambiar los límites municipales de la ciudad (véase [A/73/410](#), párr. 9)³.

5. Una enmienda a la Ley sobre el Consejo de Educación Superior, aprobada el 12 de febrero de 2018, dispuso que los colonos israelíes en la Ribera Occidental quedaban bajo la jurisdicción del Consejo de Educación Superior de Israel y se reconocía retroactivamente a las instituciones de enseñanza superior en los asentamientos que antes eran reconocidas por las autoridades militares (véase *ibid.*, párr. 10).

6. En una enmienda de la Ley de Tribunales Administrativos, aprobada en julio de 2018, se dispuso que las peticiones relativas a la Ribera Occidental en cuatro esferas, a saber, planificación y construcción, Ley de libertad de Información, entrada y salida

¹ Véanse también Peace Now, “Construction starts in settlements by year” (puede consultarse en <http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/construction>); y Oficina Central Palestina de Estadística, comunicado de prensa, 28 de marzo de 2019 (puede consultarse en www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_28-3-2019-land-en.pdf).

² Véanse los informes anteriores y [TD/B/65](#) (2)/3, párrs. 22 a 25.

³ Véase también Knéset, “Knesset passes law requiring 8-MK majority for giving up Israeli sovereignty over any part of Jerusalem”, 2 de enero de 2018.

de la Ribera Occidental y órdenes militares de restricción y supervisión, se remitirían al Tribunal de Asuntos Administrativos de Jerusalén, en lugar del Tribunal Superior de Justicia. De aprobarse, se restringiría todavía más el acceso de los palestinos a la justicia y, al ampliar la competencia de un tribunal administrativo israelí a la Ribera Occidental, también se estaría dando un paso más hacia la falta de distinción entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado (*ibid.*)⁴.

7. Los palestinos del territorio ocupado siguen sujetos a una compleja combinación de los sistemas jurídicos de Israel y de Palestina. En la Ribera Occidental, la legislación nacional israelí se aplica extraterritorialmente a los colonos israelíes, mientras que los palestinos están sujetos a la legislación militar israelí, además del sistema jurídico palestino. En consecuencia, las normas de derechos humanos no se aplican a los sospechosos y acusados de Palestina al mismo nivel que a los de Israel. La aplicación de dos sistemas jurídicos diferentes en el mismo territorio, únicamente sobre la base de la nacionalidad o el origen, es inherentemente discriminatoria y viola el principio de igualdad ante la ley, que es un elemento fundamental del derecho a un juicio imparcial. La aplicación de la legislación nacional israelí a los colonos y de la legislación militar israelí a los palestinos en la Ribera Occidental también genera inquietudes en cuanto a la obligación de la Potencia ocupante de respetar las leyes vigentes en el territorio que ocupa, salvo impedimento absoluto (véanse [A/73/87-E/2018/69](#), párr. 3; [A/72/90-E/2017/71](#), párr. 4; y [A/71/86-E/2016/13](#), párr. 7).

Acceso a los servicios y a la justicia

8. Como resultado de las restricciones israelíes y de otras medidas administrativas y de seguridad, los palestinos que viven en diferentes zonas del Territorio Palestino Ocupado tienen un acceso diferenciado a los servicios de atención de la salud y diferentes niveles de libertad de circulación. Desde la anexión de Jerusalén Oriental por Israel en 1967, los palestinos que viven allí reciben una “residencia permanente” que les permite, entre otras cosas, acceder a las prestaciones sociales y a los servicios sanitarios israelíes, pero que es revocable y depende de que sigan residiendo o trabajando en Jerusalén.

9. En el curso de los años, el Knéset aprobó varias leyes que eximían a Israel de toda responsabilidad civil por cualquier acto ilícito cometido por su ejército contra los palestinos en Gaza, que define como “territorio enemigo” (véase [A/73/420](#), párr. 63), impidiendo así el derecho de las víctimas de Gaza a un acceso igualitario a la reparación (véase [A/HRC/40/74](#), párr. 112).

10. La comisión internacional independiente de investigación sobre las protestas en el Territorio Palestino Ocupado⁵ informa de que no tiene conocimiento de ningún mecanismo alternativo empleado por Israel para indemnizar a las víctimas de Gaza por los daños causados ilegalmente por las fuerzas de seguridad (*ibid.*).

Políticas de zonificación y planificación discriminatorias

11. Como se ha señalado antes, las políticas israelíes de zonificación y planificación en la zona C y Jerusalén Oriental son discriminatorias y se consideran incompatibles con los requisitos establecidos en el derecho internacional (véase [A/73/410](#), párr. 32).

⁴ Véase también Association of Civil Rights in Israel, “2018: A bad year for democracy – human rights in Israel”, informe de 2018 sobre la situación.

⁵ Establecida en virtud de la resolución [S-28/1](#) del Consejo de Derechos Humanos para “investigar todas las presuntas violaciones y transgresiones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, [...] en particular en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de los ataques militares contra las protestas civiles a gran escala que comenzaron el 30 de marzo de 2018”;

12. La Administración Civil de Israel permite construir a los palestinos dentro de los planes generales aprobados que abarcan solo el 0,4 % de la zona C (véase [A/73/87-E/2018/64](#), párr. 4). Para que los palestinos puedan obtener un permiso de construcción fuera de esos planes, las autoridades israelíes deben aprobar un plan general local para la zona, tras lo cual se debe solicitar un permiso mediante un proceso largo y costoso que a menudo resulta en rechazo. Esto hace casi imposible que los palestinos obtengan permisos de construcción y no les deja otra opción que construir sin ellos y exponerse al riesgo de demoliciones y desplazamientos. A fin de aumentar la capacidad de los palestinos para obtener permisos de construcción, desde 2011 los interesados palestinos e internacionales han presentado a la Administración Civil de Israel 102 planes generales locales para las comunidades de toda la zona C. Solo se aprobaron cinco planes (véase *ibid.*, párr. 31).

Violencia y uso de la fuerza

13. En su calidad de Potencia ocupante, Israel tiene la obligación de tomar todas las medidas en su poder para restablecer y asegurar, en la medida de lo posible, el orden y la vida públicos en el Territorio Palestino Ocupado, y proteger a la población palestina de todo acto de violencia, en toda circunstancia (véase *ibid.*, párr. 17)⁶. Las prácticas de las fuerzas militares y de seguridad israelíes siguen siendo motivo de preocupación. La respuesta del ejército israelí a las protestas semanales de la Gran Marcha del Retorno a lo largo de la valla fronteriza de Gaza fue motivo de especial preocupación.

14. En su informe, la comisión internacional independiente de investigación sobre las protestas en el Territorio Palestino Ocupado encontró motivos razonables para creer que algunas de las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad israelíes constituían graves crímenes internacionales, incluidos posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (véase [A/HRC/40/74](#), párrs. 94, 97, 101, 102, 114 y 115), en particular mediante el uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza (véase *ibid.*, párrs. 99 y 101) y los ataques intencionales contra manifestantes civiles en Gaza por parte de francotiradores israelíes, entre ellos, niños y personas con discapacidad, así como de trabajadores del sector de la salud y periodistas (véase *ibid.* párrs. 68, 71, 74, 76 y 94).

15. Entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, 299 palestinos, incluidos 60 niños y 4 mujeres, resultaron muertos y otros 32.696, incluidos 6.713 niños y 1.812 mujeres, resultaron heridos por las fuerzas militares y de seguridad o los colonos israelíes. Al menos 199 de las muertes y 30.200 de las lesiones se produjeron durante la Gran Marcha de Regreso a Gaza al 31 de marzo. El 25 % de las lesiones fueron ocasionadas por munición real⁷.

16. El año 2018 fue el más mortífero para los palestinos desde el conflicto de 2014 en Gaza y totalizó el mayor número de heridos desde 2005. El enorme aumento de las víctimas palestinas ha sido uno de los factores clave del deterioro de la situación humanitaria en 2018. En ese año, hubo 14 muertos y 137 heridos israelíes⁸.

⁶ Véase también el Reglamento de La Haya, arts. 43 y 46; Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, art. 27.

⁷ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, base de datos de bajas, puede consultarse en www.ochaopt.org/data/casualties (consultada el 31 de marzo de 2019); “Humanitarian coordinator for the Occupied Palestinian Territory, Mr. Jaime McGoldrick, calls for action to prevent further loss of life and injury in the Gaza Strip”, 29 de marzo de 2019; y *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory*, marzo de 2019.

⁸ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory*, diciembre de 2018; véase también la base de datos de víctimas.

17. A pesar de la proporción relativamente baja de lesiones entre las mujeres en comparación con los hombres durante los acontecimientos relacionados con la Gran Marcha del Retorno, las lesiones pueden tener efectos secundarios negativos específicos para las mujeres, en particular cuando quien las sufre es una madre⁹.

18. Durante 2018 se registraron en Gaza 363 incidentes verificados de ataques de las fuerzas de seguridad israelíes contra personal e instalaciones de atención de la salud palestinos. Como resultado, tres trabajadores de la salud murieron y 565 resultaron heridos, y 85 ambulancias y otras cinco formas de transporte sanitario sufrieron daños, así como tres centros de salud. En la Ribera Occidental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) verificó 60 incidentes de ataques contra el personal sanitario y centros de atención de la salud en los que 16 funcionarios resultaron heridos, 17 ambulancias fueron atacadas y 12 clínicas y un hospital fueron afectados. Hubo 35 incidentes relacionados con la prevención o el retraso en el acceso a las ambulancias. Además, en varios incidentes supervisados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) hubo indicaciones de que los soldados no prestaron ni facilitaron la prestación de asistencia médica a los palestinos que habían sufrido lesiones graves o mortales como consecuencia de los presuntos ataques¹⁰.

19. Trascurridos más de cuatro años de la última escalada de las hostilidades en Gaza, persisten serias preocupaciones acerca de la falta de rendición de cuentas por las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes en el conflicto. También se mantienen las preocupaciones en el contexto del control y la vigilancia policial de los palestinos de la Ribera Occidental por parte de Israel. En los últimos siete años, durante los cuales se habrían abierto 114 investigaciones penales en todo el Territorio Palestino Ocupado y casi 700 civiles palestinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes, solo se han dictado cuatro actos de procesamiento contra soldados por el asesinato de palestinos desarmados: tres por muertes en la Ribera Occidental y uno por una muerte en Gaza (véase [A/HRC/40/43](#), párrs. 14 a 18).

Violencia de los colonos

20. Los palestinos siguieron sufriendo la violencia y el acoso de los colonos durante el período que abarca el informe. En 2018 aumentó la violencia de los colonos que causa víctimas o daños materiales a los palestinos: se registraron más de 280 incidentes en los que colonos israelíes mataron o hirieron a palestinos o dañaron bienes de su propiedad, lo que representa un aumento del 77 % en comparación con 2017. Como resultado, murió una mujer palestina y 115 palestinos resultaron heridos. Otros dos palestinos, presuntos autores de ataques, murieron a manos de colonos israelíes. Entre los bienes palestinos destruidos por los colonos figuran unos 8.000 árboles y unos 620 vehículos. Siete israelíes fueron asesinados por palestinos en estos incidentes en 2018, en comparación con cuatro en 2017. Hubo al menos 181 incidentes en los que palestinos mataron o hirieron a colonos y otros civiles israelíes en la Ribera Occidental o dañaron bienes israelíes, lo que representa una disminución del 28 % en comparación con el año anterior¹¹.

21. Los ataques de los colonos incluyeron el lanzamiento de piedras, actos de vandalismo y agresiones físicas, y se produjeron principalmente en las comunidades

⁹ Datos de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Impact of the ‘Great March of Return’ on gender-based violence”, 8 de junio de 2018.

¹⁰ Datos de la OMS.

¹¹ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2018: More casualties and food insecurity, less funding for humanitarian aid”, 27 de diciembre de 2018.

palestinas cercanas a los asentamientos (véase [A/73/499](#), párr. 18). Un total de 350.000 palestinos vive en 67 de esas comunidades¹².

22. Si bien las autoridades están realizando esfuerzos para prevenir e investigar la violencia relacionada con los colonos, es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o investigar los casos de violencia ocasionados por estos y enjuiciar a los autores.

23. El Gobierno de Israel decidió no renovar el mandato de la Presencia Internacional Temporal en Hebrón más allá del 31 de enero de 2019. Además de la intensificación del hostigamiento y las restricciones contra los residentes y los demás agentes de protección de la zona, la no renovación de la Presencia Internacional Temporal en Hebrón aumenta los riesgos para la protección de la población, en particular de los niños en edad escolar¹³.

24. La violencia de los colonos israelíes y la ocupación también afectan la vida de las mujeres palestinas. La violencia de los colonos, que tiene lugar en las calles y en las comunidades, repercute en la seguridad de las mujeres en sus propias comunidades, lo que limita sus derechos cotidianos y refuerza el estereotipo de que las mujeres necesitan protección y supervisión constantes¹⁴.

Detención y malos tratos

25. A finales de febrero de 2019, 5.248 palestinos detenidos y presos por motivos de seguridad estaban recluidos en prisiones israelíes, incluidos 205 niños, 48 mujeres¹⁵ y 7 miembros del Consejo Legislativo Palestino¹⁶.

26. El Comité Especial Encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios Ocupados observó que se le había planteado una amplia gama de graves preocupaciones, entre ellas el uso continuado de la detención administrativa, el arresto y la detención de niños, y la falta de acceso a una atención médica adecuada. La sociedad civil y funcionarios palestinos señalaron la detención por Israel de miles de palestinos, muchos de ellos menores, y plantearon su inquietud sobre el número de detenidos palestinos recluidos en 22 cárceles, campamentos militares y centros de detención ubicados en Israel, en contravención del derecho internacional humanitario (véase *ibid.*, párrs. 64 y 65).

27. También se había expresado preocupación por la política continua de Israel de realizar detenciones administrativas *ad hoc* y arbitrarias, en virtud de la cual los detenidos son detenidos sin juicio o acusados en el marco de órdenes de detención administrativa a seis meses renovables indefinidamente, a menudo sobre la base de información secreta a la que el detenido no tuvo acceso ni pudo impugnar (véase *ibid.*,

¹² Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, "Occupied Palestinian Territory: 2019 Humanitarian needs overview", diciembre de 2018. (Todos los datos del resumen son hasta noviembre de 2018.)

¹³ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory*, febrero de 2019.

¹⁴ Datos de ONU-Mujeres.

¹⁵ Información de la base de datos de B'tselem sobre detenidos y reclusos; puede consultarse en www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners y www.btselem.org/statistics/minors_in_custody (consultada el 31 de marzo de 2019). Véase también la información de Addameer Prisoner Support and Human Rights Association; puede consultarse en www.addameer.org/statistics (consultada el 24 de abril de 2019)

¹⁶ Información de Addameer Prisoner Support and Human Rights Association; puede consultarse en www.addameer.org/statistics (consultada el 20 de marzo de 2019).

párr. 65). A finales de febrero de 2019, 495 palestinos, incluidos 2 niños, se hallaban sujetos a detención administrativa¹⁷.

28. Además, son preocupantes los continuos informes que documentan casos de malos tratos y tortura contra detenidos palestinos, incluidos niños¹⁸. Se informó al Comité Especial de que el 75 % de las niñas y niños detenidos denunciaron que habían sido expuestos a malos tratos físicos o psicológicos (véase *ibid.*, párr. 70).

29. Desde 2000, al menos 8.000 niños y niñas palestinos fueron detenidos y enjuiciados en el sistema de justicia militar de Israel¹⁹. Las detenciones de niños suelen producirse durante incursiones nocturnas, en que las fuerzas de seguridad entran en el hogar de la familia y la despiertan para detener a los menores. Esta práctica ha sido condenada por grupos de derechos humanos, habida cuenta del temor y la ansiedad que causan a los menores y familiares. En muchos casos no se informaba a las familias de la razón por la cual se detenía a los menores. Los niños denuncian haber sido víctimas de violencia y humillación durante el transporte al centro de detención. En muchos casos, eran presuntamente interrogados sin la presencia de un padre o tutor, y preocupaba seriamente la posibilidad de que se obtuvieran confesiones forzadas. El Comité Especial observó con gran inquietud los informes acerca de la práctica de la negociación de cargos, en la que los niños detenidos se declaran culpables a cambio de una reducción de la pena. Existe la preocupación de que esta práctica presiona a los niños para que se declaren culpables en casos en que podrían ser inocentes, en particular cuando se los interroga sin la presencia de un padre o tutor (véase *ibid.*, párrs. 64, 65 and 70).

30. En 2018, Defense for Children International — Palestine documentó 120 casos de detención de niños de la Ribera Occidental, la mayoría de los cuales incluían abusos verbales, amenazas, humillación o intimidación y hasta 30 días de aislamiento, además de abusos físicos²⁰.

31. Al parecer, las madres palestinas detenidas en el Centro de Interrogatorios de Al-Moscobiyyeh son objeto de amenazas de daños a sus hijos para obtener una confesión. Las mujeres detenidas también sufren acoso sexual, a través de sugerencias y gestos sexuales, o interrogatorios a corta distancia²¹.

Desplazamiento de la población

32. Continúa la preocupación de que la confiscación de tierras sancionada por el Estado, la legalización retroactiva de asentamientos de avanzada, la demolición de viviendas de palestinos y de sus estructuras relacionadas con medios de vida, la denegación a los palestinos de permisos de construcción, las restricciones a la circulación y al acceso a medios de vida, y la violencia de los colonos y la falta de rendición de cuentas por esa violencia, contribuyan a crear un clima de coacción en las zonas controladas totalmente por Israel que empuja a los palestinos a abandonar ciertas partes de la zona C y de Jerusalén Oriental. El desplazamiento involuntario y el consiguiente traslado a otras zonas residenciales, como consecuencia de esas políticas, pueden constituir traslado forzoso si se realizan sin el consentimiento libre e informado de las personas que se reubican, en contravención de las obligaciones

¹⁷ Información de la base de datos de B'Tselem de detenidos y presos (consultada el 31 de marzo de 2019).

¹⁸ Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, "I've been there: a study of torture and inhumane treatment in Al-Moscobiyyeh Interrogation Centre", 2018. Puede consultarse en www.addameer.org/sites/default/files/publications/al_moscabiyyeh_report_0.pdf.

¹⁹ Véase www.dci-palestine.org/issues/military-detention.

²⁰ Defense for Children — Palestine, "Year-in-review: 2018 rained deadly force on Palestinian children", 31 de diciembre de 2018.

²¹ Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, "I've been there".

contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El traslado forzoso constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y equivale a un crimen de guerra (véanse [A/73/410](#), párrs. 2, 57, 58 y 64; y [A/73/87-E/2018/69](#), párr. 21).

33. Los palestinos que viven en Jerusalén Oriental, en la zona C y en la zona H2 de Hebrón son los más afectados por el entorno de coacción y corren el riesgo de ser desplazados y trasladados por la fuerza (véase [A/73/410](#), párr. 66)²². Más de 10.000 personas, el 62 % de las cuales son refugiadas, viven en 63 comunidades de la zona C de la Ribera Occidental, y corren mayor riesgo de ser trasladadas por la fuerza. Decenas de comunidades beduinas palestinas, la mayoría de ellas refugiadas, también corren el riesgo de ser transferidas por la fuerza a la región central de la Ribera Occidental; 18 de esas comunidades están situadas en la zona designada por Israel (o cerca de esta) para el plan de asentamientos E1, que tiene por objeto conectar el bloque de asentamientos de Ma'ale Adummim con Jerusalén Oriental²³.

34. Desde 2009, aproximadamente 9.260 palestinos, entre ellos 1.972 mujeres y 4.853 niños, han sido desplazados a causa de las demoliciones, incluidos 593 que fueron desplazados entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019²⁴.

35. Israel también recurre a medidas administrativas y jurídicas para revocar el estatuto de residencia de los palestinos en Jerusalén Oriental. Se revocó la condición de residente en los casos en que las autoridades israelíes consideraban que los palestinos habían “trasladado su centro de vida” de la Ribera Occidental al extranjero durante siete años o más²⁵.

36. En diciembre de 2018, el Knéset aprobó la lectura preliminar de un proyecto de ley que permitiría al ejército israelí expulsar a los familiares de un terrorista de su domicilio retirándolos de su poblado o ciudad o demarcando una zona en la que no se les permitiría entrar²⁶.

37. El temor a vivir bajo la amenaza constante del desplazamiento ha aumentado la inseguridad de las mujeres y niñas. Esto se suma al aumento de las responsabilidades de cuidado de los niños, que a menudo se enfrentan a traumas psicológicos debido a las demoliciones y a la pérdida de sus hogares. Cuando se ven desplazadas, las mujeres palestinas se encuentran aún más limitadas en su acceso a los espacios públicos y a las oportunidades de subsistencia, en un contexto de creciente vulnerabilidad e inseguridad alimentarias. También existe la posibilidad de que aumente la violencia doméstica y el recurso al matrimonio precoz como mecanismo negativo para hacer frente a la situación. Además, las niñas desplazadas pierden tiempo de escuela, lo que repercute gravemente en su bienestar psicológico y da lugar a problemas emocionales y de comportamiento que afectan su rendimiento escolar y en su permanencia en la escuela²⁷.

38. A noviembre de 2018, 14.600 palestinos seguían desplazados internamente en Gaza como resultado del conflicto de 2014, debido a la falta de fondos para la

²² Véase también Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

²³ *Ibid.*

²⁴ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, base de demolición y desplazamientos; puede consultarse en www.ochaopt.org/data/demolition (consultada el 31 de marzo de 2019).

²⁵ Véase Al-Haq, “Engineering community: family unification, entry restrictions and other Israeli policies of fragmenting Palestinians”, febrero de 2019.

²⁶ Knéset, “Bill to deport families of terrorists approved in preliminary reading”, 19 de diciembre de 2018.

²⁷ Datos de ONU-Mujeres; ONU-Mujeres, “Gender alert: needs of women and girls in humanitarian action in the Occupied Palestinian Territory” (2018).

reconstrucción. Unos 19.700 palestinos viven en viviendas destartadas y otros 24.000 necesitan ayuda urgente en materia de vivienda²⁸.

Destrucción y confiscación de bienes e infraestructura

39. En general, en 2018 se registró un aumento del 10 % en la demolición o confiscación de estructuras de propiedad palestina en la Ribera Occidental en comparación con 2017²⁹.

40. Entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019 se demolieron 500 estructuras de propiedad palestina, incluidas 132 viviendas habitadas y 65 estructuras financiadas por donantes, lo cual perjudicó a más de 32.000 personas. El número total de estructuras demolidas por las autoridades israelíes desde 2009 ascendió a 5.942, incluidas 1.704 viviendas habitadas y 981 estructuras financiadas por donantes³⁰.

41. Israel continuó con las demoliciones punitivas de las casas de las familias de los palestinos sospechosos de matar israelíes, una medida que puede equivaler a castigo colectivo. Entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, las autoridades israelíes llevaron a cabo siete de esas demoliciones³¹.

42. En la actualidad hay más de 13.000 estructuras de propiedad palestina para las que se han dictado órdenes de demolición en la zona C de la Ribera Occidental³². Al menos un tercio de las viviendas palestinas en Jerusalén Oriental carecían de permisos de construcción, lo que podía poner en peligro de desplazamiento a 100.000 residentes de la zona a consecuencia de la demolición³³.

43. Más de un tercio de la zona C tiene la designación oficial de tierras públicas (lo que Israel denomina “tierras del Estado”). La inmensa mayoría de las declaraciones de “tierras del Estado” tuvieron lugar antes del inicio del proceso de paz de Oslo, a principios de la década de 1990. Se estima que entre 1979 y 1992 Israel declaró “tierras del Estado” entre 750 km² y 900 km² de terreno. Esas “tierras del Estado” se han asignado exclusivamente para su uso por Israel y sus ciudadanos, y no en beneficio de la población local (véase [A/73/87-E/2018/69](#), párr. 20). En un informe reciente de Kerem Navot se reveló que, amparándose en órdenes militares, Israel incautó de más de 101.380 dunums (10.138 m²) en la Ribera Occidental entre 1967 y 2014, el 67 % de los cuales eran propiedad privada de residentes palestinos de la Ribera Occidental³⁴.

44. Durante 2018 y en los dos primeros meses de 2019, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) registró 39 órdenes militares israelíes de confiscación de 2,8 dunums (2.800 m²) de tierra de propiedad de palestinos en la Ribera Occidental.

²⁸ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”. Basado en Shelter Cluster Palestine, “Inter-agency shelter survey on substandard housing conditions in Gaza”, junio de 2018.

²⁹ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “West Bank demolitions and displacement: an overview”, diciembre de 2018.

³⁰ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, base de datos de demolición y desplazamientos (consultada el 31 de marzo de 2019).

³¹ *Ibid.*

³² Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

³³ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory*, diciembre de 2017.

³⁴ Véase Kerem Navot, *Seize the Moral Low Ground: Land Seizures for “Security Needs” in the West Bank* (2018).

Asentamientos israelíes

45. En su resolución [73/255](#), la Asamblea General destacó que el muro y los asentamientos que Israel estaba construyendo en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en Jerusalén Oriental y sus alrededores, contravenían el derecho internacional. Confirman esta opinión otros textos como la resolución [2334 \(2016\)](#), en la que el Consejo de Seguridad reafirmó que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tenía validez legal y constituía una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera.

46. Junto con el régimen de planificación y zonificación, la ampliación de los asentamientos, con las expropiaciones, desalojos y demoliciones que ello conlleva, dificulta el desarrollo, el empleo y la subsistencia de los palestinos, quienes además se ven privados del pleno disfrute de sus derechos socioeconómicos³⁵.

47. Los sucesivos gobiernos de Israel han apoyado el crecimiento de la población de los asentamientos mediante la prestación de servicios públicos gestionados por el Estado, la apertura de nuevas actividades económicas, la promoción de planes de vivienda y el otorgamiento de beneficios fiscales para algunos de los asentamientos (véase [A/71/355](#), párr. 4). Por “motivos de seguridad”, los palestinos suelen tener vetada la entrada a las zonas próximas a los asentamientos, que se encuentran oficialmente bajo la jurisdicción de los asentamientos y acaban anexionándose a ellos (véase [A/71/86-E/2016/13](#), párr. 5)³⁶. Sumadas a los asentamientos, estas zonas ocupan el 9,6 % del territorio de la Ribera Occidental³⁷.

48. Actualmente, en Jerusalén Oriental viven unos 215.000 israelíes, y en la zona C de la Ribera Occidental ocupada, excluida Jerusalén Oriental, residen cerca de 413.000 colonos. Esto significa que hay en total unos 630.000 colonos israelíes repartidos en 143 asentamientos de la Ribera Occidental (132), incluida Jerusalén Oriental (11), y 106 asentamientos de avanzada³⁸.

49. Entre enero y septiembre de 2018 se empezaron a construir 1.456 viviendas en asentamientos situados en la Ribera Occidental, excluida Jerusalén Oriental, lo que supone un incremento del 20 % respecto de las 1.213 edificadas de enero a septiembre de 2017³⁹.

Restricciones a la circulación y el acceso

50. Dado que la libertad de circulación es una condición indispensable para ejercer otros derechos humanos, como el derecho a la familia, la salud y la educación, los cierres impuestos por las autoridades israelíes y sus prácticas conexas, en particular las restricciones a la circulación, han tenido un efecto devastador en la vida de los palestinos y, sobre todo, de las familias. Aproximadamente un tercio de los residentes de Gaza tiene familiares en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. Como las visitas familiares no son uno de los criterios para solicitar un permiso de salida, muchas familias permanecen separadas durante años (véase [A/73/420](#), párr. 25).

³⁵ Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

³⁶ Véase también Din, “Through the lens of Israel’s interests: the civil administration in the West Bank”, documento de posición, diciembre de 2017.

³⁷ Oficina Central Palestina de Estadística, comunicado de prensa, 28 de marzo de 2019.

³⁸ Oficina del Representante Especial de la Unión Europea, “Six-month report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem (reporting period July–December 2018)”, 4 de febrero de 2019.

³⁹ *Ibid.*

Cierres en Gaza

51. Los cierres decretados en Gaza desde junio de 2007, después de que Hamás asumiera el poder, restringen considerablemente la circulación de bienes y personas, y siguen socavando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los palestinos en Gaza (véanse [A/HRC/34/38](#), párr. 29; [A/71/364](#), párrs. 28 y 29; [A/70/421](#), párrs. 15 y 22; y [A/HRC/31/44](#), párrs. 40 y 43). El bloqueo puede constituir un castigo colectivo, que está prohibido por el derecho internacional (véanse [A/73/420](#), párrs. 7, 9 y 65, y [A/72/565](#), párr. 28).

52. Los cierres siguen erosionando considerablemente la base productiva de la economía de Gaza, y las restricciones a la entrada de materias primas, equipo esencial y piezas de repuesto han obligado a posponer sistemáticamente los esfuerzos encaminados a reconstruir Gaza y fortalecer los servicios públicos básicos (véase [A/73/420](#), párrs. 32 y 64).

53. Por regla general, todos los palestinos que viven en Gaza y tienen que viajar a Israel utilizando el paso de Bayt Hanun (Erez) solo pueden hacerlo con un permiso expedido por las autoridades israelíes.

54. El porcentaje de permisos expedidos a pacientes que precisan recibir tratamiento médico fuera de Gaza sigue disminuyendo, del 92,5 % en 2012 al 62,1 % en 2016 y al 59 % en la primera mitad de 2018. Entre el 30 de marzo y el 27 de agosto, de los 270 heridos en las manifestaciones masivas organizadas durante la Gran Marcha del Retorno que solicitaron autorización para viajar a Erez, solo el 23 % recibió el permiso correspondiente, que le fue denegado al 37 %, mientras que el resto de las solicitudes siguen pendientes de tramitación⁴⁰.

55. Según los datos recopilados por la OMS, en 2018 se aprobó el 15 % de los permisos de salida solicitados en nombre de asociados en materia de salud. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de los permisos solicitados en 2018 para su personal nacional en Gaza, el 27 % fueron denegados por “motivos de seguridad” sin especificar.

56. En la práctica, el régimen de otorgamiento de permisos se caracteriza por su falta de transparencia. Innumerables palestinos, incluidos enfermos terminales, esperan con incertidumbre acerca de la situación de sus solicitudes. Además, cuando se introducen nuevas medidas y se modifican los procedimientos vigentes, por lo general hay poca o ninguna comunicación de las autoridades israelíes para informar a la población afectada (véase *ibid.*, párrs. 15 y 24).

57. Por lo general, las autoridades israelíes solicitan que los palestinos se presenten a una entrevista de seguridad en Bayt Hanun como condición previa para obtener un permiso. Algunos palestinos han denunciado que fueron objeto de trato degradante e intimidación durante esas entrevistas. También se ha informado de que se presiona a los solicitantes para que proporcionen información sobre Gaza relacionada con la seguridad (véase *ibid.*, párr. 18).

58. En 2018, el cruce de Rafah permaneció abierto 198 días durante el día, frente a 36 días en 2017⁴¹.

59. La importación a Gaza de bienes que Israel considera de doble uso civil y militar está prohibida, a menos que se obtenga un permiso de importación expedido por Israel (véase *ibid.*, párr. 29). Según la información facilitada por los comerciantes, las

⁴⁰ Organización Mundial de la Salud (OMS), Territorio Palestino Ocupado, “Monthly report: December 2018”, 29 de enero de 2019; y Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

⁴¹ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Gaza crossings’ operations status: monthly update – December 2018”, 14 de enero de 2019.

autoridades israelíes pueden considerar de doble uso prácticamente cualquier artículo, aun cuando hayan autorizado previamente su entrada sin aplicar ningún control especial⁴².

60. Aunque el volumen de las importaciones a Gaza aumentó gradualmente con el paso de los años, en 2018 las cargas transportadas en camiones se redujeron a 106.171, entre otras cosas debido a la penosa situación económica y a las condiciones de seguridad, frente a las 118.509 registradas en 2017⁴³, y sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de la población en Gaza (véase [E/ESCWA/30/5](#)).

61. No han dejado de aplicarse importantes restricciones a las exportaciones procedentes de Gaza, pese a la relativa relajación observada en 2014. Aunque en 2018 se autorizó la salida de 693 camiones⁴⁴ frente a 651 en 2017, esto representa una fracción de los niveles anteriores a los cierres; por ejemplo, solo en 2005 salieron de la Franja de Gaza 9.324 camiones (*ibid.*).

62. El Mecanismo para la Reconstrucción de Gaza que se creó en 2014 con carácter provisional ha facilitado la entrada en Gaza de grandes cantidades de materiales de construcción que de otro modo hubieran sido objeto de restricciones por parte de Israel. Casi 100.000 personas fueron desplazadas después de que sus viviendas fueran destruidas o sufrieran graves daños durante el conflicto de 2014. A finales de 2018 se habían reconstruido más del 85 % de estas viviendas. Sin embargo, las importaciones de cemento disminuyeron en 2018 a consecuencia del declive económico general en Gaza, los reducidos fondos aportados por los donantes y el hecho de que el proceso de reconstrucción estaba tocando a su fin⁴⁵. A fines de 2018, en colaboración con las Naciones Unidas, Israel y la Autoridad Palestina examinaron conjuntamente el Mecanismo para la Reconstrucción de Gaza y acordaron una serie de medidas destinadas a aumentar su funcionalidad, transparencia y previsibilidad.

63. Además de restringir el acceso, las fuerzas de seguridad israelíes establecen zonas de separación terrestres y marítimas que funcionan como “zonas de acceso restringido”. Aunque las autoridades israelíes han prohibido el tránsito de personas en las zonas situadas hasta 100 m de distancia de la valla perimetral y el paso de maquinaria pesada en las zonas ubicadas hasta 200 m de distancia, los asociados humanitarios sobre el terreno han informado de que, en la práctica, la mayoría de los agricultores consideran que la zona de interdicción se encuentra hasta 300 m de la valla perimetral y la zona de “alto riesgo” se sitúa hasta 1.000 m de distancia. Aunque los límites de la zona marítima restringida varían, llegando en ocasiones a pasar de las 12 a las 15 millas náuticas, estos suelen situarse a 6 millas náuticas de distancia, es decir, a menos de un tercio de las 20 millas náuticas estipuladas en los Acuerdos de Oslo⁴⁶.

⁴² Banco Mundial, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 18 de septiembre de 2017.

⁴³ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, base de datos de cruces de Gaza: circulación de personas y bienes; puede consultarse en www.ochaopt.org/data/crossings (consultada el 24 de marzo de 2019).

⁴⁴ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, base de datos de cruces de Gaza: circulación de personas y bienes; puede consultarse en www.ochaopt.org/data/crossings (consultada el 24 de marzo de 2019).

⁴⁵ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, febrero de 2019; y Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio, “Report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 27 de septiembre de 2018.

⁴⁶ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

Restricciones a la circulación en la Ribera Occidental

64. La circulación de los palestinos en la Ribera Occidental, incluidos los desplazamientos a Jerusalén Oriental y desde esta ciudad, se ve afectada por trabas físicas y administrativas que les impiden acceder tanto a los servicios como a la actividad económica y social. En este sentido, hasta 2018 se registraron en total 705 cierres de carreteras⁴⁷ que, combinadas con los obstáculos físicos existentes, limitaban aún más la libre circulación de los palestinos en la Ribera Occidental.

65. En particular, los palestinos que residen en la zona C tienen que enfrentarse tanto a restricciones a la circulación y el acceso como al hostigamiento del Ejército israelí y la violencia de los colonos⁴⁸.

66. En la Ribera Occidental, Israel sigue construyendo la “barrera de separación”, que en la actualidad ya supera los 465 km de extensión. Aproximadamente el 85 % de los 712 km de su trazado se encuentra en la Ribera Occidental y no a lo largo de la línea del Armisticio de 1949 (la línea verde)⁴⁹, a pesar de que esto contraviene el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, en el que se señala que la construcción del muro por parte de Israel, la Potencia ocupante, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional⁵⁰. Cuando concluya la construcción del trazado planeado, alrededor del 9,4 % del territorio que ocupa la Ribera Occidental quedará aislado del resto de la región⁵¹.

67. A noviembre de 2017, cerca de 11.000 palestinos vivían en la zona de división, ubicada entre el muro y la línea verde, y declarada zona militar de acceso restringido. Muchos no pueden acceder al resto de la Ribera Occidental⁵². Al igual que otros palestinos que necesitan entrar en la zona de división, antes tienen que obtener un permiso especial de las autoridades militares israelíes. Para noviembre de 2018, el porcentaje de permisos expedidos a propietarios y trabajadores agrícolas había disminuido, del 76 % en 2014 al 28 % y del 70 % al 50 %, respectivamente⁵³.

68. En Jerusalén Oriental, las comunidades también tienen dificultades para acceder a la atención médica a causa del trazado de la “barrera de separación”, dado que algunas se encuentran en la Ribera Occidental y tienen que cruzar los puestos de control para recibir los servicios de salud que les corresponden por derecho como residentes de Jerusalén⁵⁴. En la mayoría de los casos, otros pacientes de la Ribera Occidental deben solicitar permiso para acudir a los hospitales situados en Jerusalén Oriental⁵⁵.

69. Las ambulancias palestinas siguen teniendo problemas para acceder a Jerusalén Oriental, pues deben detenerse y demorarse para pasar los controles de seguridad. En 2018, según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, en el 84 % de los 1.462

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Datos de ONU-Mujeres.

⁴⁹ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Occupied Palestinian Territory: humanitarian facts and figures”, diciembre de 2017.

⁵⁰ *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado, opinión consultiva, ICJ Reports 2004.*

⁵¹ Betselem, “The separation barrier”, 11 de noviembre de 2017.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Según los datos publicados por las autoridades israelíes y facilitados por la organización no gubernamental HaMoked, conforme a la Ley sobre Libertad de Información. Véase Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, February 2019”.

⁵⁴ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

⁵⁵ Datos de la OMS.

trayectos realizados por ambulancias que se dirigían a Jerusalén desde otras partes de la Ribera Occidental fue necesario trasladar a los pacientes a otra ambulancia al llegar a los puestos de control, lo que ocasionó retrasos en el tráfico⁵⁶.

70. Israel sigue imponiendo restricciones que dificultan el acceso del OOPS a las comunidades de refugiados en la Ribera Occidental. Entre abril de 2018 y enero de 2019, el OOPS notificó 59 incidentes relacionados con el acceso que repercutieron negativamente en la prestación de servicios. El OOPS también registró otros 33 incidentes de este tipo en los puestos de control de Jerusalén Oriental.

Explotación, precariedad y agotamiento de los recursos naturales palestinos

71. La zona C sigue estando prácticamente vedada al Gobierno, los productores y los inversores palestinos, si bien contiene los recursos naturales más valiosos (véase TD/B/65(2)/3, párr. 25).

Agua

72. Las restricciones israelíes a la perforación y rehabilitación de pozos en la Ribera Occidental agravan la escasez de agua y siguen alterando la vida diaria y obstaculizando las intervenciones de desarrollo en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. La escasez resultante en el suministro de agua para la población palestina de la Ribera Occidental obliga al Gobierno de Palestina a comprar agua regularmente a Israel⁵⁷, en particular a la empresa israelí Mekorot⁵⁸. En la Ribera Occidental, los asentamientos israelíes y las políticas discriminatorias de asignación del agua no hacen sino agravar la situación (véase [A/HRC/40/73](#))⁵⁹.

73. Aproximadamente el 22 % del conjunto de la población se ve afectada por la falta de acceso al agua y la mala calidad de este recurso. Debido a las restricciones impuestas por Israel, cerca de 294.000 personas carecen de conexión a una red de abastecimiento de agua o reciben agua solo una vez por semana o menos, principalmente por medio de recursos hídricos sin garantías o de camiones cisternas. En la zona C, unos 95.000 palestinos reciben menos de 50 litros de agua diarios per cápita y más de 83.000 personas reciben agua potable de mala calidad⁶⁰. Según cálculos recientes, el consumo diario de agua de los residentes de Israel y los colonos israelíes (250 litros) triplica con creces el de los palestinos en la Ribera Occidental (84 litros) (véase [A/HRC/40/73](#), párr. 51)⁶¹.

74. En Jerusalén Oriental, los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene que reciben las comunidades palestinas también son deficientes, y solo el 59 % de los residentes están conectados a la red de suministro de agua de manera legal y adecuada⁶².

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Asociación de Derechos Civiles de Israel, “Water provision and drillings in the West Bank 2010-2016”, 5 de junio de 2018.

⁵⁸ Véanse los datos de la Oficina Central Palestina de Estadística, comunicado de prensa, 21 de marzo de 2019; puede consultarse en www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_21-3-2019-water-en.pdf.

⁵⁹ Betselem, “Water crisis”, 11 de noviembre de 2017; y Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, “Water in the Israeli-Palestinian conflict”, nota informativa, enero de 2016.

⁶⁰ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview: Occupied Palestinian Territory”, según el censo de la Oficina Central Palestina de Estadística.

⁶¹ Betselem, “Water crisis”; y Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, “Water in the Israeli-Palestinian conflict”.

⁶² Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”, según el censo nacional elaborado por la Oficina Central Palestina de Estadística en 2018.

75. La Administración Civil israelí ha construido siete presas en la Ribera Occidental que supuestamente permitirán a Israel controlar un volumen considerable de aguas de superficie y desviar anualmente entre 260.000 y 1 millón de m³ de aguas de superficie a los asentamientos en zonas agrícolas⁶³.

76. En Gaza, el acuífero costero, que constituye su única fuente de agua natural, está prácticamente agotado a consecuencia de la extracción excesiva y la intrusión de agua marina, motivo por el cual más del 97 % del agua no es apta para el consumo humano⁶⁴. Apenas el 10,5 % de los palestinos de Gaza accede al agua potable a través de la red de suministro pública, frente al 98,3 % en 2000. Durante ese mismo período, la dependencia del agua de tanques y recipientes y del agua embotellada aumentó del 1,4 % al 89,6 %⁶⁵.

77. En 2018, toda la población de Gaza había padecido los efectos perjudiciales de las constantes carencias y necesidades en el sector del agua, el saneamiento y la higiene. Entre las personas afectadas se encuentran 983.623 mujeres y 991.428 niños que están expuestos a los riesgos para la salud pública asociados a la mala calidad del agua, la recogida y el tratamiento deficientes de las aguas residuales, la inexistencia de una infraestructura para las aguas pluviales y la falta de prácticas de higiene adecuadas⁶⁶.

78. De no continuar los programas financiados por las Naciones Unidas en Gaza, como el programa de combustible de emergencia para generadores, la cuota media de agua se reduciría de 80 a 45 litros per cápita al día; la producción de agua procedente de 280 pozos domésticos y 30 embalses disminuiría de 220.000 a 40.000 m³ diarios; y el agua potable proveniente de 48 desalinizadoras públicas se reduciría en un 80 %, generando apenas 4.000 de los 20.000 m³ diarios de su capacidad nominal. Por otra parte, 55 estaciones de bombeo, recolección y elevación de aguas residuales en zonas densamente pobladas correrían el riesgo de inundarse, con el consiguiente desbordamiento que ello provocaría en las calles fuera del horario de funcionamiento. El rendimiento de las cinco plantas existentes de tratamiento de aguas residuales se reduciría en un 50 %, lo que supondría el vertido diario en el mar Mediterráneo de más de 116 millones de litros de aguas residuales sin tratar⁶⁷.

Contaminación

79. Además de la contaminación asociada a las deficiencias en las infraestructuras, la disminución de los ingresos de los municipios, fruto de la incapacidad de los residentes de Gaza para pagar el costo mensual de los servicios, ha acentuado el deterioro de los servicios municipales. Prueba de ello es el anuncio por parte del responsable del municipio de la ciudad de Gaza sobre el cierre de las zonas próximas a la playa debido a la contaminación provocada por la suspensión de las operaciones

⁶³ Según la información facilitada por el Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios Ocupados. Véase [A/73/499](#), párr. 34.

⁶⁴ Véanse los datos de la Oficina Central Palestina de Estadística, comunicado de prensa, 21 de marzo de 2019.

⁶⁵ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”, según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento en 2018. Véase <https://washdata.org>.

⁶⁶ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

⁶⁷ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”, según el grupo temático de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene y el Servicio de Aguas de los Municipios de la Costa; y datos sobre el vertido de aguas residuales correspondientes al mes de enero en Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Gaza Strip: early warning indicators – January 2019”, febrero de 2019.

de las plantas de tratamiento debido a la falta de combustible y electricidad, y al bombeo de aguas residuales sin tratar y su vertido directo en el mar⁶⁸.

80. Las 15 instalaciones de tratamiento de residuos o vertederos de desechos en la Ribera Occidental se encuentran, en algunos casos, cerca de las aldeas y ciudades palestinas, y en ellas no se toman las precauciones necesarias para proteger la tierra y la población residente de la contaminación y los materiales potencialmente peligrosos. Israel se ocupa de administrar estas instalaciones o vertederos, de los cuales al menos seis reciben desechos peligrosos (véase [A/73/499](#), párr. 31).

Recursos agrícolas

81. En la Ribera Occidental, la mayoría de las tierras agrícolas se encuentran en la zona C. Las restricciones al acceso y la movilidad, especialmente en la zona de división y los lugares próximos a los asentamientos, unidas al carácter discriminatorio de las políticas de asignación del agua, limitan la capacidad de los palestinos para labrar y cultivar sus tierras. Por ejemplo, los datos recogidos durante los últimos cuatro años revelan que en noviembre de 2017 el rendimiento de los olivos en la zona de división se había reducido en un 55 % hasta alcanzar el -65 % frente a las zonas a las que se puede acceder todo el año⁶⁹.

82. Por otra parte, más de dos tercios de las tierras de pastoreo y de 2,5 millones de árboles productivos se han destruido bajo la ocupación desde 1967 (véanse [A/73/201](#), párr. 6, y [TD/B/63/3](#), párr. 42 d)).

83. En Gaza, las restricciones impuestas por Israel en determinadas zonas terrestres y marítimas hacen que los pescadores palestinos no tengan acceso al 85 % de los recursos pesqueros y los productores a la mitad de la superficie cultivable (véase [A/73/201](#), párr. 7).

84. La práctica israelí de fumigar con herbicidas en las zonas limítrofes a la valla, supuestamente para mejorar la visibilidad de Gaza, también perjudicaría la producción agrícola. La fumigación afecta los cultivos que se encuentran a una distancia de al menos 1.000 m de la valla fronteriza (véase [A/73/420](#), párr. 44).

Explotación de recursos minerales

85. En la zona C de la Ribera Occidental siguen en funcionamiento diez canteras de propiedad israelí (en el transcurso de los años, esta cifra osciló entre 7 y 11), y la mayoría se ubica en terrenos declarados por Israel de propiedad estatal. Las empresas israelíes no tienen que hacer frente a las mismas limitaciones que sus homólogas palestinas y siguen obteniendo permisos para abrir canteras y realizar actividades extractivas en el Territorio Palestino Ocupado (véase [A/73/87-E/2018/69](#), párr. 73)⁷⁰.

86. Las autoridades israelíes no han expedido nuevos permisos a empresas palestinas para abrir canteras en la zona C desde 1994, a pesar de que estaba previsto en los Acuerdos de Oslo. Se calcula que en la zona C hay terrenos de 20.000 dunums (2.000 m²) aptos para realizar actividades extractivas y con reservas minerales cuyo valor asciende aproximadamente a 30.000 millones de dólares (véase

⁶⁸ Consejo Noruego para Refugiados, “Assessment report: Gaza internally displaced persons – assessment of the vulnerability situation for IDPs in Gaza, three years after the 2014 conflict”, junio de 2018.

⁶⁹ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, noviembre de 2017.

⁷⁰ Véase también Yesh Din, “The great drain: Israeli quarries in the West Bank: High Court sanctioned institutionalized theft”, documento de posición, septiembre de 2017.

E/ESCWA/30/5)⁷¹. Según el Sindicato de Productores de Piedra y Mármol de la Ribera Occidental, no se han renovado los permisos existentes. Esto ha obligado a varias canteras de propiedad palestina en la zona C a suspender sus operaciones o a cerrar definitivamente. Al cierre de canteras se ha sumado la confiscación de equipo y la imposición de multas⁷².

Situación socioeconómica en el Territorio Palestino Ocupado

87. La fragmentación física del Territorio Palestino Ocupado, producto del sistema de complejas restricciones a la circulación y el acceso impuestas por el Ejército israelí, ha dado lugar a la aparición de distintas economías en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. Esto no solo socava considerablemente las perspectivas de paz y desarrollo, sino que ha empeorado las condiciones de vida de los palestinos.

88. Agravan esta situación las considerables carencias en la financiación de los donantes al Gobierno de Palestina, el OOPS y las operaciones humanitarias en general, así como las divisiones entre los palestinos. Todo ello merma la capacidad de la comunidad internacional para responder eficazmente a las crecientes necesidades, habida cuenta de que unos 2,5 millones de palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, es decir, casi la mitad de la población, precisan de asistencia humanitaria y protección⁷³.

Situación económica

89. La economía del Territorio Palestino Ocupado sigue resintiéndose de las medidas relacionadas con la ocupación, como son las restricciones a la circulación y el acceso a los recursos y el comercio, y de casi 12 años de cierres en la Franja de Gaza. En consecuencia, los niveles de inversión en la economía palestina continúan siendo bajos, lo que ha dado lugar a un proceso de desindustrialización. Según los datos preliminares facilitados por la Oficina Central Palestina de Estadística, el producto interno bruto (PIB) real del Territorio Palestino Ocupado se redujo al 0,9 % en 2018, lo que representa un descenso significativo respecto del 3,1 % registrado en 2017.

90. El debilitamiento general del crecimiento en el Territorio Palestino Ocupado se ve acentuado por la ralentización de la tasa de crecimiento en la Ribera Occidental y la disminución de las actividades en Gaza, aspecto este último que obedece principalmente a las políticas y prácticas israelíes y a los cierres. Las divisiones internas agravan esta situación y se han traducido, entre otras medidas, en una reducción de las transferencias del presupuesto del Gobierno de Palestina y la disminución de los fondos destinados al OOPS.

91. En este contexto continúa el desdesarrollo de Gaza. En 2018, su PIB se contrajo en un 6,5 % después de la caída del 12,5 % registrada en 2017. Y, lo que es más significativo, la contribución de Gaza a la economía palestina se redujo de cerca del 31 % en 2000 al 19,6 % en 2018⁷⁴.

⁷¹ Véase también Banco Mundial, *West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy*, informe núm. AUS2922 (2013).

⁷² Yesh Din, "The great drain"; Human Rights Watch, *Occupation, Inc.: How Settlement Businesses Contribute to Israel's Violations of Palestinian Rights* (2016); y Banco Mundial, *West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy*.

⁷³ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, "2019 Humanitarian needs overview".

⁷⁴ Cálculos de la CESPAO basados en datos facilitados por la Oficina Central Palestina de Estadística. Las tasas de crecimiento se calculan como la variación porcentual anual registrada en cada trimestre.

92. El 17 de febrero, el Gobierno de Israel comenzó a aplicar la ley aprobada por el Knéset en julio de 2018 que exigía al Gobierno de Israel congelar, con cargo a los ingresos fiscales que recaudaba en nombre de la Autoridad Palestina y que transfería a esta, una suma igual a la abonada por la Autoridad Palestina “directa o indirectamente” a palestinos o familias de palestinos que hubieran sido condenados por tribunales israelíes por su presunta implicación en “actividades terroristas” o en otros delitos relacionados con la seguridad, con arreglo al derecho israelí, o que hubieran muerto en el curso de esas actividades (véase [S/2019/251](#), párrs. 42 y 43)⁷⁵. En consecuencia, el 17 de febrero Israel anunció que, a lo largo de 2019, congelaría unos 139 millones de dólares de los ingresos fiscales que recaudaba en nombre de la Autoridad Palestina, lo que equivalía a un poco más del 6 % de las transferencias totales de ingresos realizadas en 2018. El 21 de febrero, la Autoridad Palestina comunicó al Gobierno de Israel su rechazo de esa decisión unilateral y afirmó que, con arreglo al Protocolo sobre Relaciones Económicas entre el Gobierno de Israel y la Organización de Liberación de Palestina (Protocolo de París), no se podía descontar ninguna suma sin el consentimiento de las dos partes y que no iba a suspender los pagos de asistencia social a las familias de los presos. A partir de esa fecha, la Autoridad Palestina se ha negado a aceptar las transferencias de ingresos fiscales por Israel y ha declarado que no aceptará ningún ingreso si no se transfiere la suma pagadera en su totalidad. Las transferencias de ingresos fiscales por Israel representan hasta un 65 % de los ingresos totales del Gobierno palestino. Esta decisión ha llevado al Gobierno de Palestina a tomar importantes medidas de austeridad (véase [S/2019/251](#), párr. 42). Se cree que la situación aumentará los déficits de financiación y limitará las perspectivas de crecimiento y las oportunidades de empleo.

93. Antes incluso de febrero de 2019, el Ministro de Finanzas palestino había declarado que las políticas israelíes relativas a la aplicación de los acuerdos del Protocolo de París estaban provocando pérdidas fiscales cifradas, como mínimo, en 350 millones de dólares anuales. Según el Gobierno de Palestina, algunas pérdidas fiscales provienen de los cargos de tramitación (la deducción del 3 % sobre los ingresos fiscales); los impuestos y cargos aplicables a la compra de combustible; el mecanismo de recaudación del impuesto sobre el valor añadido; las importaciones indirectas; las tasas de salida de pasajeros; y los impuestos a las actividades comerciales israelíes en la zona C y el resto de la Ribera Occidental⁷⁶.

94. Si las transferencias al presupuesto del Gobierno palestino siguen disminuyendo y no se compensa el déficit financiero del OOPS, las consecuencias para la actividad económica y las condiciones sociales en Gaza serán importantes y agravarán la crisis humanitaria.

95. En 2018, debido a la escasez de oportunidades económicas, la participación de la fuerza de trabajo en el Territorio Palestino Ocupado fue del 46 %, correspondiendo el 21 % a las mujeres y el 72 % a los hombres. La tasa de desempleo en el Territorio se mantuvo elevada y siguió aumentando hasta alcanzar el 31 % en 2018 frente al 28 % en 2017. El problema del desempleo en Gaza es mucho mayor, situándose en el 52 % en 2018 frente al 44 % en 2017⁷⁷. Aquí, casi siete de cada diez jóvenes y el 49,6 % de las personas con 13 años o más de estudios estaban desempleados.

96. Las condiciones de vida han empeorado en años recientes a raíz del notable deterioro de la situación humanitaria en Gaza. La pobreza sigue siendo extrema y está

⁷⁵ Véase también Noa Landau y Jack Khoury, “Israel freezes transfer of 500 million shekels of Palestinian Authority taxes”, *Haaretz*, 17 de febrero de 2019.

⁷⁶ Para más información, véase Estado de Palestina, “Stopping fiscal leakages: the Government of Palestine’s report to the Ad Hoc Liaison Committee meeting”, septiembre de 2018.

⁷⁷ Oficina Central Palestina de Estadística, comunicado de prensa, 30 de abril de 2019; puede consultarse en www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_30-4-2019-labour-en.pdf.

cada vez más arraigada. La encuesta de hogares realizada en 2017 por la Oficina Central Palestina de Estadística reveló que el 53 % de los habitantes de Gaza vivía por debajo del umbral de pobreza nacional (el umbral de pobreza para una familia compuesta por dos adultos y tres niños se sitúa en 692 dólares mensuales en concepto de gastos), frente al 38,8 % registrado en 2011. Además, la incidencia de la pobreza extrema en Gaza aumentó del 21,1 % en 2011 hasta alcanzar un máximo del 33,8 % en 2017 (la pobreza extrema se define como la incapacidad para satisfacer las necesidades mínimas de alimentos, ropa y vivienda)⁷⁸.

Seguridad alimentaria

97. La inseguridad alimentaria afecta a casi un tercio de la población, esto es, alrededor de 1,56 millones de personas, y es el resultado de las elevadas tasas de pobreza y desempleo. El precio de los alimentos está condicionado por los mercados israelíes, donde el poder adquisitivo medio per cápita es seis veces mayor que en el Territorio Palestino Ocupado. Por esta razón, las familias palestinas pobres no pueden permitirse comprar alimentos⁷⁹.

98. Según un estudio sobre seguridad alimentaria realizado en 2018, el problema sigue siendo muy grave en el Territorio Palestino Ocupado y afecta a un tercio de los hogares (32,7 %). En la Franja de Gaza, la inseguridad alimentaria en 2018 alcanzó la cota máxima de los últimos 20 años, situándose en el 68,5 %⁸⁰.

99. El deterioro de la seguridad alimentaria en Gaza obedece a muchos factores, entre ellos el continuo empeoramiento de la situación económica, los cierres, las constantes divisiones entre los palestinos, la escasez de financiación del OOPS y los recortes salariales y retrasos en el pago de la nómina de los funcionarios públicos.

100. Entre los beduinos y las comunidades de pastores de la zona C, la inseguridad alimentaria alcanzó el 61 % y la ingesta dietética es inadecuada o casi inadecuada en el 40 % de los casos. Por ello, dependen más de la asistencia del PMA y el OOPS para atender sus necesidades alimentarias básicas⁸¹.

Educación

101. Unos 505.285 niños (249.327 niños y 255.958 niñas) en el Territorio Palestino Ocupado tienen problemas para acceder a una educación de calidad en un entorno seguro y apropiado para ellos. Cerca de 13.973 docentes (5.942 hombres y 8.031 mujeres) precisan de apoyo⁸².

102. En la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, el acceso a la educación está seriamente comprometido y afecta a 39.245 estudiantes y docentes, de los cuales 26.387 viven en la zona C, 11.481 en Jerusalén Oriental y 1.377 en otras zonas de la Ribera Occidental⁸³.

⁷⁸ Datos de la Oficina Central Palestina de Estadística, que se pueden consultar en www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Levels%20of%20living_pov_2017_02e.htm.

⁷⁹ Programa Mundial de Alimentos (PMA), “WFP DPR Palestine Country Brief”, enero de 2019.

⁸⁰ Datos del PMA de la Oficina Central Palestina de Estadística.

⁸¹ Datos del PMA.

⁸² Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”, cálculos del Grupo Integrado de Educación.

⁸³ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

103. Por añadidura, 46 escuelas en Jerusalén Oriental y la zona C corren el riesgo de ser demolidas total o parcialmente a consecuencia de las órdenes de demolición expedidas. Esto posiblemente afectará a más de 5.000 niños⁸⁴.

104. Los niños palestinos de Jerusalén Oriental se enfrentan a obstáculos para acceder a una educación inclusiva y de calidad en la ciudad. Por ejemplo, los niños que viven en la Ribera Occidental en el lado del muro se ven obligados a recorrer largas distancias, a veces en condiciones poco seguras, para acudir a las escuelas situadas al otro lado. También corren el riesgo de ser detenidos o retenidos por las autoridades israelíes⁸⁵.

105. En comparación con el pasado año escolar, unos 7.000 niños pasaron a engrosar la población estudiantil de las escuelas del OOPS en Gaza. El tamaño medio de las clases ha aumentado, pasando de 39 a 41 alumnos por aula⁸⁶. Debido a la escasez de escuelas, el impago de los salarios de los docentes y la falta de presupuestos para las escuelas de Gaza, el 70 % de las escuelas del OOPS y el 63 % de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación se ven obligadas a operar con sistemas de turnos dobles o triples⁸⁷.

106. Las restricciones impuestas por Israel tras el estallido de la segunda *Intifada* en 2000 han reducido considerablemente la asistencia de los estudiantes de Gaza a las universidades ubicadas en la Ribera Occidental. Los estudiantes provenientes de Gaza, que en una época representaban el 35% de la población estudiantil de la Ribera Occidental, hoy en día están prácticamente ausentes de sus universidades (véase [A/73/420](#), párr. 26).

Salud

107. Aproximadamente 1.163.618 de personas en la Ribera Occidental y Gaza necesitan ayuda para acceder a servicios médicos asequibles y de calidad⁸⁸. En Jerusalén Oriental existen además grupos de individuos extremadamente vulnerables que no pueden acceder a los servicios disponibles en Jerusalén y la Ribera Occidental, de los cuales cerca de 140.000, entre ellos 40.000 refugiados, precisan de asistencia médica⁸⁹.

108. Tras años de cierres y desdesarrollo, el sistema de salud en Gaza se encuentra al borde del colapso, y está sobrecargado debido al elevadísimo número de bajas asociadas a las continuas manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno⁹⁰.

109. En Gaza, se calcula que el porcentaje de retraso del crecimiento en 2018 era del 10 % y afectaba principalmente a los niños procedentes de familias de refugiados y bajos ingresos; de los 92.430 niños menores de 5 años, un grupo especialmente vulnerable, 10.000 sufrían de raquitismo y unos 36.000 presentaban diarreas acuosas o hemorrágicas a consecuencia de la crisis del alcantarillado y el acceso cada vez más limitado al agua potable⁹¹.

⁸⁴ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”, cálculos del Grupo Integrado de Educación.

⁸⁵ UNICEF, *State of Palestine: Country Report on Out-of-School Children* (Jerusalén Oriental, 2018).

⁸⁶ Datos del OOPS.

⁸⁷ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian Needs Overview”.

⁸⁸ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2018–2020 Humanitarian response strategy – January–December 2019 humanitarian response plan”, diciembre de 2018.

⁸⁹ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Datos de la OMS.

110. Las limitaciones e impredecibilidad del suministro eléctrico en la Franja de Gaza tienen graves implicaciones para el sector sanitario, pues ponen en peligro la vida de los pacientes ingresados en hospitales y clínicas. Este problema afecta a los pacientes a los que se mantiene con vida de forma artificial en las unidades de cuidado intensivo, los recién nacidos vulnerables en incubadoras y los pacientes que necesitan ser intervenidos de urgencia para salvar su vida⁹².

111. El gran aumento de las bajas durante la Gran Marcha del Retorno ha incrementado todavía más la presión que soporta un sistema sanitario ya de por sí frágil y ha repercutido en la capacidad del sector de la salud en general para prestar servicios a la población. Los hospitales dan el alta demasiado pronto a los pacientes con traumatismos para que otros pacientes puedan ocupar sus plazas⁹³.

112. Además de las cerca de 210.000 personas que ya se encuentran en una situación extremadamente vulnerable y padecen trastornos psicológicos graves o moderados, los acontecimientos en Gaza han tenido consecuencias mentales y psicosociales: unas 52.098 personas, entre ellas 26.049 niños, necesitan asistencia psicológica y psicosocial⁹⁴.

113. Dada la fragmentación legislativa y física de la Ribera Occidental, los palestinos tienen dificultades para ejercer su derecho a la salud, especialmente los residentes de comunidades vulnerables como la zona C, la zona de división y la zona H2 en Hebrón. En estos lugares, un tercio de la población tiene un acceso limitado a la atención primaria de la salud. En total, 135 comunidades son atendidas por clínicas móviles. Los esfuerzos por crear instalaciones más permanentes en ciertas comunidades se topan con unas políticas de planificación restrictivas⁹⁵.

III. El Golán sirio ocupado

114. El Secretario General sigue reafirmando que lo dispuesto en la resolución [497 \(1981\)](#) del Consejo de Seguridad sigue siendo válido. En ella, el Consejo señaló que la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración en el Golán sirio ocupado era nula de pleno derecho y no tenía efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional.

115. En su resolución [2018/20](#), el Consejo Económico y Social reafirmó que la construcción y ampliación de los asentamientos israelíes y la infraestructura conexa en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y el Golán sirio ocupado eran ilegales y suponían un grave obstáculo para el desarrollo económico y social. El establecimiento y la expansión de los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y el Golán sirio ocupado equivalían al traslado por Israel de su propia población civil al territorio que ocupa, algo prohibido por el derecho internacional humanitario (véase [A/73/410](#), párr. 63).

116. Tras la ocupación israelí del Golán (1.159 km²) en 1967, el 95 % de su población siria fue desplazada o expulsada, y 340 comunidades fueron arrasadas⁹⁶. Hay casi tantos israelíes como sirios en el Golán sirio ocupado, pese a lo cual la población siria está limitada a una parte muy pequeña de la tierra. Al mes de abril de 2018, 26.261 colonos israelíes vivían en 34 asentamientos en el Golán sirio ocupado y controlaban,

⁹² Datos de la OMS.

⁹³ Datos de la OMS; y Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, “Gaza: waiting for treatment”, 21 de noviembre de 2018.

⁹⁴ Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “2019 Humanitarian needs overview”.

⁹⁵ Datos de la OMS.

⁹⁶ Al-Marsad, “Parallel report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Israel”, 14 de enero de 2019.

junto con el ejército, el 95 % de la tierra, mientras que 26.600 sirios vivían en cinco aldeas (véase [A/73/499](#), párr. 83). El Gobierno de Israel apoya a los colonos israelíes ofreciéndoles incentivos financieros, que en algunos casos ascienden a 12.000 dólares por familia, y desarrollando zonas residenciales e industriales⁹⁷.

117. Sigue preocupando la situación en el Golán sirio ocupado, donde los residentes sirios siguen haciendo frente a dificultades debido a las políticas discriminatorias en materia de tierras, vivienda y desarrollo de las autoridades israelíes (véase [A/73/410](#), párr. 60).

118. Debido a las políticas israelíes de zonificación y planificación, para los sirios resulta casi imposible obtener permisos de construcción, lo que ha aumentado el hacinamiento en las aldeas, limitado las oportunidades de desarrollo y dificultado la expansión de las aldeas para responder al incremento de la población⁹⁸. En este contexto, las autoridades israelíes han dictado más de 1.570 órdenes de demolición de edificaciones sirias desde 1983⁹⁹.

119. La legislación israelí permite que los asentamientos formados por 400 viviendas o menos discriminen a los árabes sirios con arreglo a la Ley de 2011 por la que se Modifica la Ordenanza relativa a las Sociedades Cooperativas, que habilita a los comités de admisión para decidir si los solicitantes reúnen los requisitos para residir en la comunidad en función de su “compatibilidad con el tejido sociocultural” o las “características únicas de la comunidad”¹⁰⁰.

120. Dadas las limitadísimas oportunidades de empleo en su país, hay cada vez más jóvenes sirios en el Golán que buscan trabajo en Israel o en el extranjero, motivo por el cual se ven más presionados para obtener la ciudadanía israelí. Preocupa la posibilidad de que con ello la ocupación se intensifique y se consolide¹⁰¹.

121. En 2016, solo el 43 % de las personas en edad de trabajar tenían empleo. Pese al gran apego que sienten los sirios por la tierra, el sector agrícola ha experimentado un declive a causa de las políticas discriminatorias que regulan los derechos de acceso a los recursos hídricos y a la tierra. Estas políticas han empeorado la calidad de los cultivos y, por consiguiente, su comerciabilidad.

122. Cuando los sirios encuentran trabajo, suelen conformarse con empleos peor remunerados para los cuales están muy sobrecualificados porque las probabilidades de encontrar otro tipo de ocupación son nulas¹⁰². Los asentamientos en el Golán suelen utilizar contratistas que echan mano de trabajadores sirios porque no tienen que garantizarles todos los privilegios que les corresponden por derecho. Muchas de estas empresas contratistas no ofrecen prestaciones adecuadas a sus trabajadores y pagan

⁹⁷ Al-Marsad, “Observations and topics to be included in the list of issues: on the occasion of the Human Rights Committee’s 2018 review of the State of Israel’s implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights”, 11 de abril de 2018; véase también Israel, Ley por la que se modifica la ordenanza relativa a las sociedades cooperativas (núm. 8), 5771–2011.

⁹⁸ Datos de la OIT.

⁹⁹ Al-Marsad, “Parallel report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Israel”, 14 de enero de 2019.

¹⁰⁰ Al-Marsad, “Observations and topics to be included in the list of issues: on the occasion of the Human Rights Committee’s 2018 review of the State of Israel’s implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights”, 11 de abril de 2018; véase también Israel, Ley por la que se Modifica la Ordenanza relativa a las Sociedades Cooperativas (núm. 8), 5771–2011.

¹⁰¹ Datos de la OIT.

¹⁰² Al-Marsad, “Parallel report to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Israel”, 14 de enero de 2019, párr. 22.

salarios extremadamente bajos. Los sirios que viven en el Golán tienen pocas alternativas a esta estructura (véase [A/73/499](#))¹⁰³.

IV. Conclusión

123. La prolongada ocupación israelí del territorio palestino y el Golán sirio sigue afectando negativamente las condiciones de vida de las poblaciones palestina y siria, y el desarrollo social y económico de los territorios ocupados. El impacto negativo de la ocupación y las políticas y prácticas israelíes es multidimensional, y sus efectos acumulados influyen en el futuro de las poblaciones que viven bajo la ocupación.

124. Las actuales tendencias sociales y económicas en el Territorio Palestino Ocupado hacen pensar que será casi imposible lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible si las condiciones existentes no mejoran radicalmente. Las restricciones, la ampliación de los asentamientos ilegales y otras prácticas de las autoridades israelíes no solo impiden el desarrollo en los territorios ocupados, sino que dan lugar a crisis humanitarias que obligan a dedicar esfuerzos a nivel nacional e internacional para prestar ayuda inmediata en lugar de invertirlos en el desarrollo.

125. La crisis de financiación por la que atraviesa el OOPS es otro factor que no hace más que empeorar la situación de cientos de miles de palestinos que ya viven en condiciones difíciles. El Secretario General reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que mantenga su apoyo decisivo a los derechos de los refugiados palestinos y el mismo nivel de financiación del OOPS en 2019.

126. Los cierres, otras medidas restrictivas adoptadas por Israel, las repetidas escaladas de violencia y la reducida financiación de los donantes han agravado la situación en Gaza y exigen que la comunidad internacional intervenga más y de forma inmediata.

127. Israel sigue empleando políticas y prácticas contrarias a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Algunas de estas prácticas pueden considerarse discriminatorias y otras pueden equivaler al traslado forzoso o castigo colectivo de personas protegidas, lo que constituiría una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y está prohibido en virtud del derecho internacional.

128. La adhesión al derecho internacional es imperiosa, pues vela por que ninguna de las partes goce de impunidad, y garantiza la justicia y la paz para todos los pueblos de la región, incluidas las poblaciones palestina y siria bajo ocupación.

129. Las Naciones Unidas mantienen su postura de larga data de que solo se puede lograr una paz amplia y duradera mediante una solución biestatal negociada. El Secretario General seguirá velando por que las Naciones Unidas trabajen en pro del establecimiento de un Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable que viva en condiciones de paz con un Israel seguro, con Jerusalén como capital de ambos Estados, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y el derecho internacional.

¹⁰³ *Ibid.*, párr. 25.